

**JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.**

EXPEDIENTE: SUP-JDC-2994/2009.

**ACTORES: JESÚS ANTONIO
DOMÍNGUEZ GARCÍA Y OTROS.**

**AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE
TABASCO.**

**MAGISTRADO PONENTE:
CONSTANCIO CARRASCO DAZA.**

**SECRETARIO: ANTONIO RICO
IBARRA Y FÉLIX HUGO OJEDA
BOHÓRQUEZ.**

México, Distrito Federal, once de noviembre de dos mil
nueve.

VISTOS, para resolver, los autos del juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano
identificado con la clave **SUP-JDC-2994/2009**, mediante el cual,
**Jesús Antonio Domínguez García, María Asunción García
Domínguez, José Jesús Torres Valenzuela, Jesús Manuel
Herrera Candelerero, María Thelma Cancino Alejandro, Iris
Vanesa Gallegos Sánchez, Rafael Segura Segura, Rosario**

Palma Hernández y José Antonio López Doporto, respectivamente, impugnan la resolución de doce de octubre de dos mil nueve, dictada en el expediente TET-AP-41/2009-I, por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco.

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes. De acuerdo con las manifestaciones de los actores y de las constancias que obran en autos se tiene lo siguiente:

1. Convocatoria para participar como asistentes electorales. Del nueve al trece de junio de dos mil nueve, la juntas electorales distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, emitieron convocatoria para la designación de los asistentes electorales que participarían durante el proceso electoral a celebrarse en aquella entidad federativa el dieciocho de octubre siguiente.

2. Designación de asistentes electorales. Mediante acuerdo XV-CED/AC/2009/004, de quince de agosto de dos mil nueve, emitido por XV Consejo Electoral Distrital del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, con sede en Paraíso,

Tabasco, se aprobó la designación de Jesús Antonio Domínguez García, María Asunción García Domínguez, José Jesús Torres Valenzuela, Jesús Manuel Herrera Candelerero, María Thelma Cancino Alejandro, Iris Vanesa Gallegos Sánchez, Rafael Segura Segura, Rosario Palma Hernández y José Antonio López Doportó.

3. Recurso de revisión. El diecinueve de agosto del año en curso, el Partido Revolucionario Institucional interpuso recurso de revisión al considerar que los hoy actores no reunían los requisitos que establece el artículo 285 de la Ley Electoral de Tabasco, relativo a no militar en algún partido u organización política. Dicho medio de impugnación se registró con la clave REV/CE/2009/004.

El treinta de septiembre siguiente, el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco emitió resolución dentro del citado expediente, mediante la cual confirmó el acuerdo impugnado.

II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución anterior, el cuatro de octubre de dos mil nueve, el Partido Revolucionario Institucional interpuso recurso de apelación que

se radicó ante el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco en el expediente TET-AP-41/2009-I, resuelto el doce de octubre siguiente, en los términos siguientes:

“ ...

SEGUNDO. Se revoca la resolución REV/CE/2009/006, emitida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, de treinta de septiembre del año en curso, a través de la cual confirma el acuerdo XV-CED/AC/2009/004, emitido por el consejo Distrital Municipio de Paraíso, Tabasco, de quince de agosto de dos mil nueve.

TERCERO. En consecuencia, el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en un plazo no mayor de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente fallo, deberá ordenar al XV Consejo Electoral Distrital del Municipio de Paraíso Tabasco, la destitución de los ciudadanos Jesús Antonio Domínguez García, María Asunción García Domínguez, José Jesús Torres Valenzuela, Jesús Manuel Herrera Candelerero, María Thelma Cancino Alejandro, Iris Vanesa Gallegos Sánchez, Rafael Segura Segura, Rosario Palma Hernández, como asistentes electorales y los segundos y José Antonio López Doporto, Dulce María Domínguez Flores, Alfredo Aguirre Flores, Leonardo Madrigal de la Cruz, Rocío gallegos Sánchez y Manuel Hernández Pérez, como parte de la lista de reserva para cubrir las vacantes de Asistentes Electorales, con excepción de Juan Carlos garcía Pérez por los razonamientos ya apuntados, debiendo informar la autoridad responsable a este Tribunal Electoral, del cumplimiento dado a esta resolución.

...”

III. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Inconformes con la determinación anterior, el dieciséis de octubre del año en curso, Jesús Antonio Domínguez García, María Asunción García Domínguez, José

Jesús Torres Valenzuela, Jesús Manuel Herrera Candelero, María Thelma Cancino Alejandro, Iris Vanesa Gallegos Sánchez, Rafael Segura Segura, Rosario Palma Hernández y José Antonio López Doporto, presentaron ante el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

IV. Trámite. El veinte de octubre siguiente, el tribunal responsable remitió el escrito de demanda y, en su oportunidad, las constancias respectivas a la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz, de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

V. Acuerdo de incompetencia. En la fecha citada, la Sala Regional se declaró incompetente para conocer del juicio señalado, ordenando remitir a esta Sala Superior el expediente respectivo, el informe circunstanciado de la autoridad señalada como responsable y demás documentación atinente.

VI. Recepción del expediente en Sala Superior y turno a ponencia. El veintidós de octubre siguiente, se recibió en

esta Sala Superior el expediente citado; la Magistrada Presidenta ordenó formar el expediente **SUP-JDC-2994/2009** y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Constancio Carrasco Daza, para los efectos señalados en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VII. Acuerdo de competencia. Mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil nueve, dictado por esta Sala Superior, determinó asumir la competencia y ordenó dictar la resolución que en Derecho proceda; y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79,

párrafo 1, 80, párrafo 1, inciso f), y 83, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por ciudadanos, por su propio derecho y de manera individual, en el que aducen la conculcación de derechos político-electorales, a fin de controvertir una sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, por considerar que la resolución impugnada violenta en su perjuicio su derecho de ejercer el cargo de asistentes electorales para el que fueron nombrados para el proceso electoral en la entidad federativa mencionada.

Lo anterior, en términos del acuerdo de competencia dictado en el expediente en que se actúa, en el cual se estimó que esta Sala Superior tiene la competencia originaria para conocer y resolver de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, cuando no se trate de un caso regulado expresamente, como de la competencia de las Salas Regionales.

SEGUNDO. Improcedencia. Con independencia de que en el presente caso se actualice cualquier otra causa de

improcedencia, esta Sala Superior advierte que se concreta la relativa a que el acto impugnado se ha consumado de un modo irreparable, en aplicación de lo previsto en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que en lo conducente señala:

"Artículo 10

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos:

(...)

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés jurídico del actor; **que se hayan consumado de un modo irreparable**; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley..."

Esta Sala Superior ha sostenido, que un medio de impugnación resulta improcedente si se pretenden impugnar actos o resoluciones consumados de un modo irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producirse todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes que se cometieran las presuntas violaciones reclamadas, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o ejecutados, provocan la imposibilidad de

resarcir al promovente en el goce del derecho que se estima violado.

De esta forma, el requisito procedimental consistente en que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, se establece como un presupuesto procesal, porque su falta daría lugar a que no se configurara una condición necesaria para constituir la relación jurídica procesal válida, ante la existencia de un obstáculo que impide la constitución del proceso y, con ello, se imposibilita el pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional sobre la controversia planteada. Así lo ha sostenido esta Sala Superior en la tesis de jurisprudencia S3ELJ37/2002, con el rubro:

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES. LAS CONDICIONES DE PROCEBILIDAD ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 99 CONSTITUCIONAL SON GENERALES. El artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo cuarto, fracción IV, establece que corresponde al Tribunal Electoral resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones y que esta impugnación procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos. Como se desprende de su lectura, se establecen una serie de requisitos que han sido clasificados como presupuestos o condiciones de procedibilidad, que sin embargo no se vinculan con un medio de impugnación

específico, sino exclusivamente con la posibilidad jurídica de combatir los actos administrativo-electorales o jurisdiccionales que se emitan por las autoridades competentes de las entidades federativas. Analizados los presupuestos procedimentales de esta disposición, debe aplicarse el principio general del derecho referente a que, donde la ley no distingue nadie debe distinguir, y por tanto, si nuestra Ley Fundamental no establece que dicha posibilidad jurídica sólo sea exigible cuando la impugnación de tales actos o resoluciones estén vinculados a los comicios estatales, o se deduzca de algún medio específico de los establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que la ley secundaria no puede orientarse en sentido restrictivo, ni el legislador cuenta con la aptitud jurídica de limitar las normas de rango constitucional y aun y cuando se haya determinado como vía natural constitucional para la impugnación de elecciones estatales y municipales al juicio de revisión constitucional electoral, debe inferirse que la exigibilidad que ampara la norma suprema lo es respecto de todos los medios de impugnación inscritos en esta ley secundaria, independientemente de la vía procesal exigida al actor para combatir los actos comiciales estatales.”

Ahora bien, en términos del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios de impugnación serán improcedentes en el caso de que se pretendan impugnar actos o resoluciones que se hayan consumado de un modo irreparable, es decir, cuando habiendo sido emitidos o ejecutados, imposibiliten resarcir al quejoso en el goce del derecho que estime violado.

Ello es así, toda vez que, como lo ha reiterado esta Sala Superior, los actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales correspondientes, en relación con el

desarrollo de un proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgarle certeza al desarrollo de los comicios, así como seguridad jurídica a los participantes en los mismos.

En el presente asunto, los actores solicitan la revocación de la sentencia de doce de octubre de dos mil nueve, dictada en el expediente TET-AP-41/2009-I, por el Tribunal Electoral de Tabasco, a través de la cual se ordenó al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la destitución del cargo de asistentes electorales para el que fueron designados; siendo así, su pretensión esencial consiste en que a través de la sentencia de esta Sala Superior, se les restituya en el cargo de asistentes electorales con las funciones y derechos inherentes a dicho cargo.

No obstante, con independencia de lo fundado o infundado de los argumentos que los actores expresan en contra de la resolución impugnada, la destitución reclamada y la consecuente restitución en el cargo de asistentes electorales que solicitan, resulta un acto consumado e irreparable, toda vez

que conforme a la normativa electoral del Estado de Tabasco, las funciones y actividades que son propias de la naturaleza del cargo de asistente electoral, concluyen a más tardar con el acto de entrega y recepción de los paquetes electorales de las casillas a los consejos electorales correspondientes, circunstancia que a la presente fecha ha quedado superada, y a ningún efecto práctico conduciría el estudio del posible derecho de los actores de seguir en el ejercicio del cargo de asistentes electorales.

Al respecto, el artículo 285 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, en la parte que interesa, dispone lo siguiente:

Artículo 285. Los Consejos Electorales Distritales, con la vigilancia de los Representantes de los Partidos Políticos, designarán a más tardar dos meses previos al día de la jornada electoral a un número suficiente de asistentes electorales, de entre los ciudadanos que hubieren atendido la convocatoria pública expedida al efecto y cumplan los requisitos a que se refiere el párrafo tercero de este artículo.

Los asistentes electorales auxiliarán a las Juntas y Consejos Electorales Distritales en los trabajos de:

- I. Recepción y distribución de la documentación y materiales electorales en los días previos a la elección;
- II. Verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla;
- III. Información sobre los incidentes ocurridos durante la jornada electoral;
- IV. Apoyar a los funcionarios de casilla en el traslado de los paquetes electorales; y

V. Los que expresamente les confiera el Consejo Electoral Distrital, particularmente lo señalado en los párrafos tercero y cuarto del artículo 281 de esta Ley.

De conformidad con dicho precepto, la designación de asistentes electorales tiene como finalidad esencial, proporcionar el auxilio correspondiente a las juntas y consejos electorales distritales en tareas específicas que se desarrollan durante el día de la jornada electoral, así como en días previos y el siguiente a tal fecha, como son la recepción y distribución de la documentación y materiales electorales en los días previos a la elección; verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla; información sobre los incidentes ocurridos durante la jornada electoral; apoyar a los funcionarios de casilla en el traslado de los paquetes electorales; y, además, aquellas que expresamente les confiera el Consejo Electoral Distrital, particularmente lo señalado en los párrafos tercero y cuarto del artículo 281 de esta Ley.

Por su parte, el citado artículo 281, dispone lo siguiente:

Artículo 281. Una vez clausuradas las casillas, los Presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al Consejo Electoral Distrital, y en su caso, también al Municipal que corresponda, los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, contados a partir de la hora de clausura:

I. Inmediatamente después de la clausura, cuando se trate de casillas ubicadas en cabecera municipal; y

II. Hasta 12 horas cuando se trate de casillas ubicadas fuera de la cabecera municipal.

Los Consejos previamente al día de la elección podrán determinar la ampliación de los plazos anteriores para aquellas casillas que lo justifiquen.

Los Consejos adoptarán previamente al día de la elección, las providencias necesarias para que los paquetes con los expedientes de las elecciones sean entregadas dentro de los plazos establecidos para que puedan ser recibidos en forma simultánea. Lo anterior se realizará bajo la vigilancia de los Partidos Políticos que así desearan hacerlo.

Los Consejos acordarán que se establezca un mecanismo para la recolección de la documentación de las casillas cuando fuere necesaria en los términos de esta Ley.

Se considerará causa justificada, para que los paquetes con los expedientes de casilla sean entregados, al Consejo Electoral Distrital o Municipal, fuera de los plazos establecidos, cuando medie caso fortuito o fuerza mayor.

El Consejo Electoral Distrital o Municipal, hará constar en el acta circunstanciada de recepción de los paquetes a que se refiere el artículo 286, las causas que se indiquen para el retraso en la entrega de los paquetes.

Este precepto, como se advierte, se encuentra relacionado con las actividades que se deben llevar a cabo para que los paquetes electorales de las casillas que funcionaron durante el día de la jornada electoral, sean entregados a los consejos distritales y municipales, o en su caso a los centros de acopio respectivos, ello, a más tardar en los plazos a que se refieren sus fracciones I y II, es decir, a más tardar, al día siguiente de la jornada electoral.

Al respecto, es un hecho notorio para esta Sala Superior y que no es motivo de controversia en el presente juicio, que la jornada electoral para elegir diputados y miembros de ayuntamientos en el Estado de Tabasco, tuvo verificativo el pasado dieciocho de octubre del año en curso, por lo cual las labores de auxilio que deberían haber prestado los asistentes electorales para las actividades propias de la entrega y recepción de paquetes de casilla en los consejos electorales, concluirían, en forma ordinaria, a más tardar el diecinueve de octubre de este año, con lo cual concluyeron también sus funciones en dicho cargo.

De ese modo, si la demanda de este juicio fue recibida en esta Sala Superior hasta el veintidós de octubre de este año, la reparación de la violación reclamada por los ciudadanos actores, en el caso de que resultara fundado lo alegado respecto a que fueron indebidamente destituidos de sus cargos de asistentes electorales, resulta irreparable, lo que constituye un obstáculo que impide la constitución del proceso y, con ello, se imposibilita el pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional sobre el fondo de la controversia planteada.

En tales condiciones, la demanda del presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

es notoriamente improcedente, y por tanto debe desecharse de plano.

Por otra parte, los actores aducen, que con la resolución impugnada además de privárseles de sus derechos político-electorales de formar parte de las autoridades electorales, también se les afecta su patrimonio por la dieta que, en su concepto, tienen derecho a percibir por el desempeño de su función electoral.

Como se advierte, los inconformes pretenden a través de la presente vía impugnativa el resarcimiento de prestaciones de tipo patrimonial, lo cual, en consideración de esta Sala Superior, son propias del medio de impugnación que en Derecho proceda para reclamar los derechos que deriven de la relación contractual (civil o laboral) que hubieren celebrado con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, por lo cual se les dejan a salvo dichos derechos para que los hagan valer en la vía impugnativa que estimen pertinente.

Por cuanto hace al ciudadano José Antonio López Doporto, opera diversa causa de improcedencia, acorde con lo

dispuesto por el artículo 9, párrafo 1, inciso g), de la Ley adjetiva citada, conforme al cual los medios de impugnación, se deben presentar por escrito y cumplir, entre otros requisitos, con el de hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente.

A su vez, el párrafo 3 del propio precepto legal ordena, que, cuando se incumpla alguno de los requisitos previstos en el referido inciso g), procederá el desechamiento de plano.

Al respecto, debe señalarse que la firma autógrafa del actor en la demanda es, por regla, la forma apta para acreditar este requisito, porque el triple objeto de la firma autógrafa consiste en identificar a quien emite o suscribe un documento, en vincular al autor con el hecho jurídico *lato sensu* contenido en el documento y, en dar autenticidad al escrito respectivo.

Por tanto, la falta de firma autógrafa o de cualquier otro signo que dé autenticidad al escrito de demanda respectivo, como puede ser la huella digital, genera la duda de la existencia del acto jurídico unilateral a través del cual se ejerce el derecho de acción, situación que determina la ausencia de un

presupuesto necesario para constituir la correspondiente relación jurídica procesal.

En el caso a estudio, como se observa de manera notoria e indubitable, el escrito inicial de demanda carece de la firma o algún otro signo que dé autenticidad al escrito, por el demandante José Antonio López Doporto.

Conforme con lo anterior, es evidente que en este particular se concreta el desechamiento de plano del juicio para la protección de los derechos político-electorales al rubro indicado, conforme a lo previsto en el artículo 9, párrafo 1, inciso g), y párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en razón de que, como se ha analizado, no se firmó autógrafamente el escrito de demanda.

Por lo expuesto y fundado se

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se **desecha** de plano la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, presentada por lo actores, en términos del considerando segundo de esta sentencia.

SEGUNDO. Se dejan a salvo los derechos de tipo patrimonial, civil o laboral, de los actores, para que los hagan valer en la vía impugnativa que estimen pertinente.

Notifíquese, personalmente a los actores, en el domicilio que indicaron para tal efecto; **por oficio**, con copia certificada de la sentencia al Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, así como al Consejo estatal de Participación Ciudadana de la misma entidad, y **por estrados** a los demás interesados; lo anterior, con fundamento en los artículos 26, 27, 28 y 29, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Devuélvase la documentación atinente y, en su oportunidad, remítase el expediente al archivo jurisdiccional, como asunto definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Secretario General de Acuerdos autoriza y da fe.

MAGISTRADA PRESIDENTA

**MARÍA DEL CARMEN ALANIS
FIGUEROA**

MAGISTRADO

**CONSTANCIO CARRASCO
DAZA**

MAGISTRADO

FLAVIO GALVÁN RIVERA

MAGISTRADO

**MANUEL GONZÁLEZ
OROPEZA**

MAGISTRADO

**JOSÉ ALEJANDRO LUNA
RAMOS**

MAGISTRADO

**SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS**

MAGISTRADO

**PEDRO ESTEBAN PENAGOS
LÓPEZ**

MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO

